

Sin nombres

El general de brigada del Aire don Luis Rey Rodríguez, director del Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas, y el coronel del Aire Carlos Grandal Segade, subdirector general del Transporte Aéreo del Ministerio del Aire, han sido cesados en sus puestos y se encuentran en disposición de destino como consecuencia de las investigaciones que recaen sobre ellos en relación con los sobornos realizados por la compañía Lockheed en España.

Esta, junto con la entrevista —cuyo contenido se desconoce— mantenida por el general Rey y el ministro del Aire, Franco Iribarnegaray, es la única novedad que se ha producido en la semana en relación con uno de los "asuntos" más significativos del panorama nacional y que más atraen la atención de la opinión pública. Demasiado poco. Sobre todo si tenemos en cuenta que, como el propio ministro del Aire ha declarado al diario "ABC", el hecho de que los dos mencionados militares prestaran declaración sobre el caso no prejuzga su responsabilidad en el mismo: los implicados pueden ser otros.

Al margen de ello, y sin aclarar para nada el panorama, Avionica, la empresa de "consulting" que gestionaba algunos de los intereses de la Lockheed en España y a cuyo consejo de administración pertenecían los dos militares encausados ha reivindicado por boca de su presidente, Fernando Herce, su escasa participación en el asunto cargando sobre la Lockheed las culpas de los posibles sobornos.

El número de sobornados que se barajaba desde el mes de febrero, momento en el que el nombre de España fue citado por los representantes de la propia Lockheed a raíz de la investigación iniciada por un subcomité del Senado de los Estados Unidos por el senador Church, era el de once: habían percibido un total de 1.350.000 dólares en concepto de comisión por unas ventas de la casa en España por valor de 27,9 millones de dólares. Pero posteriores investigaciones señalan que esas once personas serían la "cabeza" y que en la misma podrían no encontrarse otros nombres "menores" entre los que podrían encontrarse los militares antes citados.

En definitiva: no se ha hecho sino arañar el tema. Los nombres de la Lockheed son todavía un misterio: hasta el extremo de que algunas fuentes han señalado que muy bien podría darse el caso de que en los 1.300 folios del informe que se entregó en Washington al ministro español de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, no figurara ninguna lista de beneficiados por los sobornos de la compañía.

Todo eso es preocupante. Porque al tiempo que se producen estos misterios en España, en todo el mundo, en

no menos de diecisiete países, las investigaciones sobre los sobornos de la Lockheed avanzan a más o menos buen ritmo. Y en todos los lugares en donde sale a la luz pública algo sustancioso, los implicados están por lo menos a nivel de ministro de Defensa: el príncipe Bernardo de Holanda, consorte de la reina, recibió 1.100.000 dólares por conseguir que la Lockheed vendiera aviones en su país; dos ex ministros de Defensa italianos, Luigi Gui y Mario Tanassi, están implicados en los sobornos, habiéndose incluso de que el actual primer ministro Mariano Rumor sea el nombre clave con el que la empresa americana denominaba al principal de sus contactos en Italia; Franz Joseph Straus, el democristiano bávaro, es acusado consistentemente como dirigente de la operación soborno que hizo comprar a Alemania Federal —cuando él era ministro de Defensa— casi mil F-105, el avión que, pese a sus constantes accidentes, era renovado por el ejército del aire alemán: los archivos de las compras han desaparecido. En Japón, un prohombre político derechista, Kodama Yoshio, es el principal implicado en el escándalo, con sobornos que rozan los siete millones de dólares, provocando el "affaire" la caída del primer ministro Kasuei Tanaka. En Suecia, el parlamento inicia investigaciones para saber si el comandante en jefe de la fuerza aérea sueca, general Dick Stenberg, ha recibido sobornos de la Lockheed. Parece confirmado que Sukarno, cuando era presidente de Indonesia, también cayó en las garras de la multinacional americana.

Pero el asunto, si algún día se llegara al fondo, no termina en la Lockheed. Se sabe, sólo por hablar de compañías fabricantes de aviones, que Mac Donnell Douglas practica el mismo sistema de sobornos para vender sus productos, que lo mismo hace la Boeing y la Northrop —las tres vendedoras en el mercado español y la última, incluso, con sucursales de montaje en nuestro país—. La primera de ellas ha reconocido al subcomité presidido por el senador Church haber sobornado en el extranjero por valor de dos millones y medio de dólares entre 1970 y 1975.

Pero no sólo son compañías fabricantes de aviones: la Gulf Oil, la Exxon y la Mobil Oil, las tres gigantes del petróleo y las tres con importantes intereses en España, han reconocido y han sido acusadas de haber realizado pagos "legales" a distintas personalidades políticas de varios países para asegurar sus mercados.

El asunto Lockheed no ha hecho sino empezar y el asunto Lockheed no es sino el primero de los muchos que en esta misma línea deben existir en España. ■ C. E.

tos niveles. Claro que había potencialmente unas salidas —el sociólogo es, ya se sabe, un profesional que crea su propia demanda—, pero el problema estaba en saber si las primeras promociones de la Facultad, que comenzarán a salir a partir de este curso, estarían capacitadas técnicamente para hacer frente a las exigencias, tanto de la empresa privada como de la pública.

Significativamente, en el debate no se trataba siquiera de discutir sobre el papel del sociólogo como legitimador o por el contrario revulsivo de un cierto orden; no se trataba de formular la alternativa, sin embargo esencial en cualquier latitud, entre una sociología funcionalista y otra marxista. Lo que allí se planteaba era sencillamente si el futuro licenciado tendría algo útil que ofrecer a una hipotética empresa a cambio de un sueldo. ¿Podría aportar, además del título, los conocimientos técnicos indispensables para cualquier tipo de intervención sociológica? ¿Sabría construir y manejar variables, elaborar estadísticas más o menos complejas? El escepticismo de los estudiantes resultaba, cuando menos, frustrante. ¿Cómo era posible que una Facultad hubiese llegado a un extremo de deterioro tal que ni siquiera servía ya para formar a sus alumnos como piezas de un determinado engranaje? No se trata, por supuesto, de un caso aislado, sino más bien típico, de la Universidad española, pero hay que tener en cuenta como agravante en ese caso la dependencia de la sección de Sociología respecto de la Facultad de Políticas, en la que se integró en 1971. La Facultad de Políticas, creada para formar los cuadros políticos de un régimen que necesitaba generar su propia "intelligencia", capaz de legitimarlo, acabaría convirtiéndose, con la llegada de nuevas promociones y el natural

desgaste del franquismo, en una de las zonas más conflictivas de toda la Universidad.

La incorporación a la misma de los estudios sociológicos, consecuente con las necesidades de un capitalismo de corte más moderno, no haría sino agravar las contradicciones entre una superestructura de intereses tanto ideológicos como materiales y las necesidades objetivas de una institución científica que como tal debía adecuarse a la dinámica de las fuerzas sociales. Incapaces de hacer frente a una situación que se les escapa de las manos, los viejos prohombres de la Universidad autárquica prefieren ver cómo la institución se desmorona antes que renunciar a sus prebendas.

¿Cuál es la situación actual de la Facultad en ambas secciones? Los propios alumnos la han resumido así: insuficiencia de espacio y consecuente abarrotamiento de las aulas; inexistencia de una biblioteca mínimamente válida; plan de estudios provisional en Sociología al cabo de cuatro años de funcionamiento; persistencia de asignaturas sin otra razón de ser que la de justificar una prebenda; absentismo de muchos profesores que se empeñan en utilizar a la Facultad como plataforma de lanzamiento político; relación prácticamente nula entre profesor y alumno fuera de las horas lectivas; ausencia total de investigación; congelación del nombramiento oficial, como decano, de Salustiano del Campo, quien, tras comprometerse a llevar adelante una plataforma democrática, fue elegido el pasado julio en un claustro de Facultad tripartito y paritario, y, por último, la huelga de solidaridad de los "penenos" con diecisiete de sus compañeros a quienes no se les había renovado el contrato para el presente curso. Y no precisamente por absentismo. ■ JOAQUÍN RABAGO.

Por unas elecciones libres

HACE pocos días se reunieron en el Eurobuilding de Madrid unos treinta representantes de 22 partidos políticos, especializados en temas electorales, en una jornada de trabajo preparatorio del congreso que sobre "Ley Electoral y consecuencias políticas" ha organizado el Centro de Investigación y Técnicas Políticas para los días 16, 17 y 18 de noviembre.

El profesor Jiménez de Parga desarrolló las líneas básicas de su ponencia sobre "Garantías electorales" haciendo un análisis muy realista de la necesidad de estas garantías en las tres fases de las elecciones (antes, durante y después de las mismas). Seguidamente el profesor González Casanova tocó con gran acierto el tema delicado de "Ley Electoral y estructura regional del Estado", estudiando los aspectos electorales desde el punto de vista de la "región" en su sentido territorial y geográfico. El profesor Díez Nicolás trató el tema de "Ecología electoral" desglosando los aspectos de estructura social y opinión pública; y lo referente a los distritos y circunscripciones electorales. El profesor Martínez Cuadrado trató de "Las motivaciones en el comportamiento político-electoral". Y cerró el conjunto el profesor Carlos Ollero tratando del "Contexto político de unas elecciones en España".

Un intercambio abierto, sincero y profundo entre los citados representantes con los conferenciantes supone una esperanza a la hora de clarificar el gran problema de la estructuración de una ley electoral, sobre todo de cara a los primeros momentos de realización democrática que pueden, y debían, suponer las próximas elecciones.

Es evidentemente necesario, de cara

a todo el territorio del Estado español, una información y un análisis de los pros y contras de una ley electoral para un próximo futuro. De cómo se estructuren las posibles elecciones de un modo o de otro, dependerá el resultado.

Por ejemplo de elegirse una solución puramente mayoritaria, como propugna algún grupo franquista a la derecha del régimen, a elegir un sistema proporcional en el que el porcentaje de votos corresponda exactamente al porcentaje de diputados, hay una diferencia esencial en el momento presente del país. Por el primer sistema, hábilmente manejado y con las influencias que probablemente se han de dar, barrería a una buena parte de la izquierda española o la dejaría muy disminuida. En cambio por el sistema proporcional se podría llegar a esa concordancia entre votos y diputados para que todos los votantes estuvieran proporcionalmente representados. El peligro de atomización que este sistema pudiera traer, se compensaría con la necesidad de que unas primeras elecciones verdaderamente libres, como desea el país, fuesen de verdad totalmente representativas de cara a una profunda transformación constitucional y comienzo de una era democrática.

Sin llegar a un elenco de conclusiones de estas Jornadas, que se pueden calificar de únicas, sin embargo, se produjeron una serie de coincidencias notables entre los asistentes respecto a dos puntos fundamentales: 1) las condiciones básicas para unas elecciones auténticamente democráticas sin exclusión de nadie; y 2) sobre la mejor adecuación del sistema proporcional a la actual coyuntura política del país. ■

RAMON L. SABUNDE.

Sociología

No hay salidas

HOY más que nunca necesita nuestra Universidad reflexionar sobre sí misma, interrogarse por su razón de ser y su papel futuro en la sociedad que poco a poco se perfila. Y en esa reflexión, ineludiblemente crítica y fatalmente renovadora, los estudiantes tienen, como sector de todos el más dinámico, un papel fundamental que cumplir.

Tal es, por ejemplo, el sentido de la mesa redonda organizada hace tan solo unos días por los alumnos de la sección de Sociología de la Facultad de Políticas dentro de la semifructuosa Semana de las Universidades de Madrid. Y no deja de ser natural, si bien se mira

que quienes se preparan, al menos en teoría, para estudiar instituciones, comiencen precisamente por la que hoy por hoy más les duele.

¿Qué hacemos aquí?, ¿para qué se nos capacita? y, sobre todo, ¿después qué?, eran preguntas que afloraban una y otra vez con obsesiva insistencia en el debate entre estudiantes y profesores, y de nada o muy poco servía el que un Salustiano del Campo hablase de las salidas abiertas en la Administración —Departamentos de Planificación, Gabinetes de Urbanismo, Institutos de Opinión Pública—, en los mass media, sobre todo en la publicidad y también en la enseñanza a sus distin-